

Agenda para una mayoría absoluta



Luis
Sánchez-Merlo

A pocos días de que se apaguen las luces de la legislatura, el debate inmoderado ha causado un trastorno distímico en las filas socialistas, en tanto los sondeos electorales ofrecen datos elocuentes sobre los resultados del 23-J que no dejan de ser indicarios.

La tendencia más acreditada apunta a un cambio que pudiera ser más profundo de lo que apuntan conjeturas más pendientes de la celebración de los comicios en un día imposible del verano o del colapso del voto por correo, que de cuestiones esenciales pendientes de confrontación sin demora.

Esta cavilación, sin nombres ni apellidos, tiene la pretensión de desgranar la herencia que le espera a quien –con o sin coalición– se alce con la mayoría absoluta; priorizar objetivos y tiempos para acometer premuras latentes, así como distopías no descartables a lo largo de la travesía.

La temperatura que envuelve las vísperas refleja, en unos casos, desazón; la de quienes optan sin rubor por defenderse atacando, acusando de mendacidad al aspirante, lo que no deja de delatar un fracaso sin asumir o una derrota que se atisba cercana.

Enfrente, a la luz de experiencias pasadas, sigue latiendo una cautela histórica en cuanto al incumplimiento –una vez más– de expectativas, desatendiendo tareas diferidas.

A tenor del desahogo con que se ha gobernado y a la vista del nivel de arrebatado de quien defiende el reducto, fuera de sí, una atmósfera de recelo y sospecha rodea el proceso, hasta llegar a poner en cuestión la observancia de reglas de juego; a todas luces, líneas rojas.

Tras adelantar de forma insospechada las elecciones, el titular sorprendió a sus conmlitones con un esmerado discurso en el que habló de acusaciones de fraude contra él y de intentar mandarlo a prisión, anticipando que cuando surgen una rebelión contra la inevitabilidad, la venda toma la delantera de la herida.

En los cuatro años de la legislatura que agoniza, celos y sospechas se han ido convirtiendo en evidencias. La creación de un sistémico aparato de poder –intentando eliminar o invadir contrapesos– se ha traducido en una abrasiva colonización de instituciones. Y ese atropello ha recortado derechos y creado situaciones incómodas en la vida de los ciudadanos.

Mientras tanto, serpenteando encuestas, mítines y ocurrencias, ha ido tomando cuerpo una mayoría social. Y lo que parece ir calando es que será inevitable que gobierne quien ha cobrado ventaja en los sondeos, gracias a tener claro un prontuario –las elecciones se ganan en el centro– que le sirvió para ganar cuatro mayorías absolutas. Mientras tanto, su contrincante sigue incómodamente instalado en la radicalidad sin marcha atrás.

Hay mucho que reformar, pero antes de nada hay que fortalecer el Estado de Derecho, demediado con indultos ideológicos, derogación de delitos (la sedición y la rebaja de la malversación de caudales públicos) y falta de consideración al poder judicial. Parte de ello en atención a consideraciones tácticas desveladas, en un debate en la televisión pública, por uno de los negociadores de ventaja.

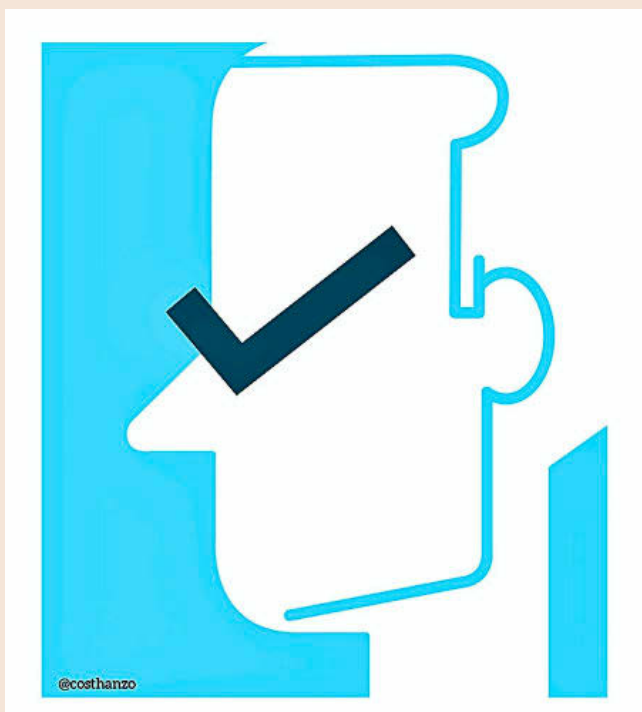
Empezando por la verdadera separación de poderes –cuestionada en Bruselas–, no caben dilaciones

en la elección de los jueces y del fiscal general del Estado, así como en la reforma de una ley electoral, a doble vuelta, para acabar con el feudalismo de minorías codiciosas.

En unidad de acto, hay que comprobar el estado del déficit público, problema crónico desde el principio de la transición, la sostenibilidad de las pensiones y, en definitiva, del Estado de Bienestar tal como lo conocemos. El resultado de la auditoría completa habrá que dárselo a conocer a la sociedad, para que sepa –con detalle– que el gasto público es ya imposible de mantener, el Estado tiene un problema de solvencia y la deuda pública (350.000 millones de euros, de nueva deuda, en 5 años) sigue cabalgando, sin freno.

Afrontar la realidad

En una estructura territorial, con competencias tan cuestionadas por los contribuyentes, la clase política ha clonado el Estado (coches oficiales, institutos y observatorios varios, defensores del pueblo y lo que haga falta...), lo que sumado a un paro obsceno, sobre todo en mayores de 50 y en menores de 30, exige ha-



blar claro de una vez y afrontar la realidad, sin aletargarla. A diez días de unas elecciones inéditas, el Gobierno menos austero de la democracia ha anunciado una nueva oferta récord de empleo, 40.000 plazas de una tacada, insistiendo en otra propensión: el 55% de todo el empleo que se ha creado durante la legislatura ha sido público.

La reforma del sistema de pensiones, utilizado como ariete por políticos con luces cortas, debe sustituir la eufemística “solidaridad generacional” por una “mochila” donde se deposite y después cada cual recoja lo que haya metido en ella.

Está pendiente una reforma de calado estructural que adelgace la Administración, que se lleva el 66% de los Presupuestos Generales del Estado, elimine las subvenciones desquiciadas y acabe con el derroche y los privilegios de la clase política en general.

Quien aisló a la oposición en los actos de su mandato europeo no debe ser ejemplo para la Comisión Europea, observadora esencial de unas formas de gobierno que han de acreditar un cambio, tanto en la gestión del déficit como en las ayudas con Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

Nuestro país precisa un giro de 180 grados, con alguien al volante que sea capaz de conciliar la paz social con cantidades industriales de sentido común, acompañado por una tripulación solvente, aunque siga estando mal pagada.